

# PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

CENTRO JUDICIAL CAPITAL  
Oficina de Gestión Asociada Civil y Comercial N° 2

ACTUACIONES N°: 179/08



H102325186750

## Juzgado Civil y Comercial Común de la I° Nominación

San Miguel de Tucumán, 17 de octubre de 2024.-

**AUTOS Y VISTOS:** Para resolver estos autos caratulados: “**ROMERO CARLOS ALBERTO c/ SERRANO RICARDO Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS**” (Expte. n° 179/08 – Ingreso: 19/02/2008), de los que

### RESULTA:

**1. Demanda.** En fecha 19/02/2008 (fs. 6/19, pág. 17/45) se presenta Carlos Alberto Romero DNI N° 25.373.111 con domicilio real en calle 25 de Mayo n° 521 entrepiso “D” de esta ciudad e inicia demanda por daños y perjuicios en contra del Sr. Ricardo Serrano DNI° n° 12.921.912 y de los herederos del suceso de José Serrano por la suma de \$413.612, en concepto de daño emergente, lucro cesante y daño moral con más los intereses gastos y costas o lo que en más o en menos sepa discernir el magistrado y surja de las circunstancias de hecho y de derecho.

Relata que el día 10/12/2002 realizó una operación de cesión de derechos y acciones posesorias con el Sr. José Serrano mediante escritura pública n° 321 para adquirir de éste un inmueble ubicado en la localidad de “Isca Yacu”, departamento Jiménez, provincia de Santiago del Estero identificado en el anteproyecto de mensura y división aprobado por el Gobierno de Santiago del Estero como serie “B”, n° 753/77, lote n° 3, superficie aproximada de 117 has., linda al norte con lote n° 2 parte del lote n° 1 y Ruta Provincial n° 130, al Sud con lote n° 4, al Este con Tenené y al Oeste con Ruta Provincial n° 13 Padrón de Rentas Inmobiliario n° 11-1-00929, identificación n° 033893. Expresa que en dicha cesión se reconoció el contrato de locación a favor del Sr. Santiago Seiler, cuyos derechos locativos se transfirieron a su parte.

Indica que a dicho momento, el inmueble adquirido no se encontraba inscripto en el Registro Inmobiliario. Señala que inició los trámites de prescripción adquisitiva en contra del Gobierno de la provincia de Santiago del Estero en la causa caratulada “Romero Carlos Alberto c/Gobierno de la Provincia y Otros s/Prescripción Adquisitiva Veinteañal”. Expte. n° 236.176 (11168) del año 2003”, tramitado ante el

Juez Civil y Comercial Común de la Sexta Nominación de los tribunales ordinarios de dicha provincia. Agrega que dicho juzgado hizo lugar a la demanda y, en fecha 20/01/2005, se protocolizó la sentencia de prescripción ante el Registro General de la Propiedad Inmobiliaria de dicha provincia.

Continúa su relato señalando que, en fecha 22/01/2003, el Sr. José Serrano -quien fuera su cedente- fallece. En consecuencia, señala que los demandados inician el juicio sucesorio radicado ante el Juzgado de Familia y Sucesiones de la 1° Nominación de la provincia de Tucumán, siendo declarados herederos: José Serrano DNI n° 11.030.047, Francisco Serrano DNI n° 12.389.765, Graciela Serrano DNI N° 14.416.348, Ricardo Serrano DNI N° 12.921.912 (quien a su vez fue designado administrador), Ángela Isabel Serrano DNI N° 17.927.219 y Estela Serrano DNI N° 23.827.862.

Precisa que en fecha 07/10/2003, el codemandado Ricardo Serrano, alegando ser administrador del sucesorio de José Serrano y junto con otras personas ingresaron por la fuerza, con armas de fuego de manera violenta e intempestiva en su propiedad y lanzaron por la fuerza a quien ocupaba la posesión del inmueble en carácter de arrendatario en ese momento, Sr. Santiago Seiler. Expresa que por ello denunció al demandado penalmente por los delitos iniciando la causa "Serrano Ricardo S.S.D Usurpación de Propiedad, Daño, Retención Indebida y Robo (art. 181, 183, 173 inc. 2 y 164 del Código Penal. Expte. 171/03" ante el Juzgado de Crimen de la Localidad de Las Termas provincia de Santiago del Estero).

Expone que la conducta y las declaraciones en sede penal del demandado fueron variando con el paso del tiempo. Indica que a fs. 10 el demandado expresa que se "abocó a tomar todas las medidas pertinentes para tomar posesión sobre todos los bienes que conforman el acervo hereditario de su padre". Sostiene que el inmueble no se encontraba inscripto a nombre del causante José Serrano por lo que los herederos no podían denunciarlo como bien del sucesorio ya que no contaban con documentación que acredite su titularidad o posesión.

Por su parte, adelanta que los demandados dirán que fue hijo del Sr. José Serrano y aclara que ello no es así, en tanto conforme partida de nacimiento que acompaña es hijo legítimo de José Romero y María Isabel Romero. Asimismo, expone que adquirió el inmueble mediante una operación totalmente legal y los demandados en ningún momento iniciaron redargución de falsedad en contra del instrumento de cesión y tampoco se presentaron al juicio de reivindicación ni prescripción adquisitiva iniciado por su parte, pese a tener conocimiento de su

existencia. Señala que en todo momento intentaron perjudicar su nombre y el de su familia pero nunca probaron sus posturas.

Continúa su relato, con la primera declaración en sede penal (fs. 10 de dicha causa, 14/10/2003) en donde el demandado habría manifestado que mediante un oficio judicial librado a la Sra. Jueza de Paz de la localidad de Isca Yacu se lo puso en posesión del inmueble en cuestión, se constató que el mismo se encontraba libre de ocupantes y que se cultivaba trigo. Sostiene la inexistencia de dicho oficio por parte del Juzgado de Familia y Sucesiones a fin de entregar la posesión al administrador provisorio. Expone que en la causa penal señalada el fiscal interviniente decide oficiar al Juzgado en Familia y Sucesiones de la I Nominación a fin de que remita copia certificadas de las actuaciones, del cual surge: a) que el inmueble no pertenece al acervo sucesorio; b) el demandado a fs. 48 de dicho sucesorio reconoce la existencia de arrendatarios en la finca en cuestión; c) a fs. 57 reconoce como arrendatario de la finca al Sr. Santiago Seiler; d) cuando el demandado solicita se le faculte a realizar denuncias por supuestas irregularidades el Juzgado le requiere la firma de todos los herederos, lo que nunca se realizó; e) no existe oficio a fin de ponerlo en posesión del inmueble en cuestión.

Sostiene que el demandado mintió ante el fiscal diciendo que no tenía ocupantes y luego aclara que existía trigo sembrado. Agrega que en definitiva se quedó a la fuerza usurpando su propiedad, quedándose con los cultivos del locatario y realizando luego nuevos sembrados pese a existir órdenes judiciales que se lo prohibía y hasta llegó a alquilar a terceras personas.

Manifiesta que las actividades ilícitas realizadas por el Sr. Serrano fueron puestas en conocimiento del sucesorio por presentaciones realizadas por el Sr. Santiago Eduardo Seiler, quien además remitió cartas documentos a cada uno de los miembros del sucesorio. De ello, expresa que la conducta de los miembros del sucesorio fue singular, por cuanto únicamente las herederas Estela Serrano y Ángela Serrano informan de ésta situación al Juzgado de Familia manifestando que ellas no votaron por ese administrador y hacen reserva por los perjuicios que le pudiere ocasionar su accionar. Sostiene que los otros herederos Francisco, Graciela y José Serrano guardan silencio sobre la actividad del Sr. Ricardo. Refiere que la conducta del sucesorio los hace responsables por los daños.

Transcribe la declaración de fecha 29/03/2004 realizada por el Sr. Ricardo Serrano al ser citado a prestar declaración indagatoria en la causa penal, resalta que el demandado afirma no haber usurpado la propiedad, no hizo daño al campo ya que ingresó por una orden judicial, nunca estuvo prófugo, que el campo se encuentra en las mismas condiciones como el trigo cosechado, etc.

Agrega que a fs. 603 de la causa penal por decreto de fecha 14/07/2005 se dictó una medida cautelar de no innovar en contra del demandado por el inmueble en cuestión y que en virtud de las apelaciones, el demandado continuó disponiendo del inmueble. Expresa que por ello, inició en el año 2007 (luego de cuatro años de la usurpación) la acción civil de reivindicación ante el Juzgado Civil y Comercial Común de la V° Nominación de los tribunales ordinarios de Santiago del Estero, en la cual se informó que el demandado se encontraba procesado y con orden de desalojo, se acreditó en dicho expediente: 1) la propiedad del inmueble, 2) la pérdida de la posesión por terceros; 3) el ostentar el derecho de poseer en virtud de título de propiedad otorgado por un juez competente. Señala que en dicha causa en fecha 18/05/2007, se hizo lugar a una medida cautelar innovativa y se ordenó el desalojo del Sr. Ricardo Serrano y la restitución de la posesión al Sr. Carlos Alberto Romero.

Manifiesta que el estado de pánico y miedo que sentía hacia el Sr. Serrano y su familia, quienes ya le habían agredido físicamente y le realizaban constantes amenazas tanto a su persona, a su madre y a sus abogados, lo llevó a que realizara nuevos gastos y personal de vigilancia a cargo del Sr. Roque Patricio Cajal DNI 28.412.038 a quien en fecha 15/05/2007 le otorgó un poder especial para que en su nombre tome y/o reciba la posesión del inmueble conforme escritura n° 99 de fecha 15/05/2007. Agrega que realizó tratamiento psicológico desde finales del año 2003 el que continúa hasta la actualidad a cargo del licenciado Jorge Lozada.

Indica que la conducta del demandado significó la presentación de múltiples denuncias que incluyeron amenazas, golpes y lesiones, ofreciendo como prueba la causa penal "Serrano Ricardo s/ Lesiones. Víctima Carlos Romero" que tramita ante la Fiscalía de Instrucción de la I° Nominación en los tribunales ordinarios de Tucumán. Así también, señala que acompaña denuncias realizadas por Roque Carabajal a la policía de Santiago del Estero por las amenazas en contra de éste.

Luego, señala que en el juicio de reivindicación donde se ordenó el desalojo, se apersonó la Sra. Miriam Mercedes Jerez DNI 27.975.879 y solicitó intervención voluntaria, ostentando la calidad de arrendataria del predio, adjuntando un contrato de locación. Expresa que de dicho instrumento se puede observar que el Sr. Serrano detenta la posesión del inmueble a título de continuación de la posesión de quien en vida fuera Jose Serrano. Destaca que el demandado ya no manifiesta que actúa como administrador de la sucesión sino como continuador de la posesión.

Explica que la Sra. Jerez es la concubina y pareja del hijo del Sr. Ricardo Serrano quien tiene el mismo nombre y refiere que convive con él conforme

las actas de escribano, argumentaciones vertidas en dicha causa, guía de teléfono, de las cuales surge el domicilio de la misma. Afirma que la Sra. Jerez remitió a su parte innumerable cantidad de cartas documentos (las que identifica como CD 881121958 de fecha 06/11/2007, CD 905544454 de fecha 09/11/2007, CD 881122595 de fecha 14/11/2007, CD90459704 de fecha 28/11/2007, CD 915181175 de fecha 03/12/2007), extorsionando y solicitando explicaciones sobre el arrendamiento, defendiendo al Sr. Serrano e intimando que deje de cosechar en su propiedad.

Menciona que hacia el año 2003 era un incipiente agricultor y como consecuencia de la compra del terreno al Sr. Serrano tenía muchas expectativas, lo cual no fue concretado.

Refiere que como consecuencia de los actos de los demandados tuvo que hacer frente a gastos de escribanos y abogados lo que lo llevaron a tener que recurrir a préstamos usurarios, que concluyeron con la venta del campo en cuestión. Informa que vendió el campo a un precio diez veces inferior al de mercado en fecha 01/08/2007, por escritura pública n° 239 al Sr. Alejandro Miguel Jerez DNI 21.744.038. Asimismo, adjunta acta de fecha 02/08/2007 donde consta la devolución de diez pagarés que le había firmado al mismo por un monto de \$10.000 cada uno dinero que le había prestado a lo largo de los años que duró la usurpación para afrontar los gastos que le ocasionaron los demandados. Sostiene que el estado de insolvencia económica en que se encontraba, se mantiene y agrava en la actualidad, debido a que no tenía forma de pagar las deudas de honorarios, lo llevaron a su vez a vender los vehículos, darse de baja en Afip y no permitirle siquiera trabajar.

Detalla los presupuestos jurídicos de la responsabilidad civil. En cuanto a la acción, refiere que el acto positivo fue la usurpación en el carácter de administrador de la sucesión, lo que deriva en consecuencias hacia el sucesorio. Asimismo, refiere que el acto omisivo fue la negación a restituir las tierras, lo que lo obligó a recurrir a la justicia hasta lograr el desalojo.

Respecto a los demás codemandados, refiere que el aspecto positivo consistió en el sin número de acciones judiciales que estos iniciaron en su contra sin ningún tipo de fundamento ni pruebas.

Cita la causa "Gracia Diaz de Serrano s/ Su Denuncia" que tramita por ante la Fiscalía de Instrucción n° 10 de los tribunales ordinarios de la provincia de Tucumán, en la cual la ex esposa del Sr. Serrano fue denunciado por operaciones de venta, las que señala nunca realizó con el Sr. Serrano y en la que no se encuentra discutida la operación en Iscu Yaco, única operación realizada con el Sr. José Serrano. Manifiesta que en dicha causa los miembros del sucesorio ratificaron

dicha denuncia.

Luego, cita la causa “Gracia Diaz de Serrano vs Politti Matar Victor y Otros s/ Redargución de Falsedad. Expte. n° 2489/03”, radicada en el Juzgado Civil y Comercial Común de la Quinta Nominación de los tribunales de ésta provincia. Manifiesta que la demanda es del año 2003 y a la fecha de su presentación no le corrieron traslado.

Informa respecto de la existencia de un supuesto expediente en su contra sobre “estafa procesal” (conforme los dichos del Sr. Ricardo Serrano en sede penal) radicado ante la justicia del crimen de Santiago del Estero, respecto del cual sostiene nunca fue citado a prestar declaración.

Agrega que la conducta de los codemandados consistió también en una inacción, ya que el Sr. Santiago Seiler, quien fuera locatario del inmueble usurpado, notificó de la conducta del administrador a los restantes miembros del sucesorio. Destaca la posición de las herederas Estela Serrano y Ángela Isabel Serrano, quienes pusieron en conocimiento del Juez de Familia las misivas recibidas. Sin embargo, expresa que ante la situación planteada, ninguno de los herederos solicitó medidas. Expresa que el actuar del administrador del sucesorio lo asemeja a la figura del mandato y que, pese a que físicamente la usurpación fue realizada por el codemandado Ricardo Serrano y no haberse planteado la ilegitimidad del acto, consintieron su accionar. A más de ello, expone que los herederos ni siquiera pidieron la remoción del administrador, designación de un veedor y/o pedido de informes sobre la situación.

En relación a la antijuridicidad, cita el art. 1109 del CC, el principio “alterum non ledere” y el art. 1072 del CC en que se especifica el dolo del agente. Refiere que en virtud de tal regla, la persona que ejecuta un hecho culposo y ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación y que, ante la imposibilidad de volver las cosas al estado en que se encontraban en octubre de 2003, lo obliga a pedir la indemnización dineraria.

En cuanto a la imputabilidad, la divide en atribuibilidad y factor de atribución, remitiéndose a la conducta de los responsables del ilícito. En cuanto a la relación de causalidad, destaca que resulta evidente que el accionar del Sr. Serrano fue la productora del daño. Cita la teoría de la causalidad adecuada, arts. 901 y 905 del CC. Expresa que si se suprimiera la actividad del agente, nada hubiera perturbado a su parte.

Reclama daños, ya que en fecha 10/12/2002 adquirió el inmueble en cuestión y se vio privada de utilizarlo desde 07/10/2003 hasta la fecha de desocupación de los mismos por desalojo. Detalla los rubros solicitados. Funda su

derecho en los arts. 1068 y 1069 del CC. Solicita embargo preventivo, el que fuera concedido en fecha 20/11/2009 (fs. 174). Ofrece prueba y solicita beneficio de litigar sin gastos.

Por escrito de fecha 27/03/2008 (fs. 142), acompaña documentación original la que es reservada (15/04/2008, fs. 145) y denuncia como hecho nuevo un acontecimiento de fecha 27/02/2008, en el cual a horas 11.00 en esquina de 25 de Mayo y Santiago frente a su vivienda el Sr. Ricardo Serrano (h) lo agredió salvajemente produciendo lesiones en todo el cuerpo, radicando su denuncia ante la comisaría.

Por proveído de fecha 24/04/2008, el Juez del presente Juzgado se declara incompetente y remite los autos al Juzgado de Familia y Sucesiones de la I° Nominación. Por providencia de fecha 10/11/2008, dicho Juzgado observa la competencia y eleva los autos a la Corte Suprema de Justicia, la cual resuelve en fecha 30/03/2009 (fs. 156) disponiendo que el Juzgado Civil y Comercial Común de la I° Nominación entienda en la causa.

**2. Traslado de demanda.** Por decreto de fecha 25/03/2010 (fs. 177), se ordena correr traslado de la demanda por el término de ley.

A fs. 191/192 corre glosada cédula de traslado de demanda dirigida a Ángela Isabel Serrano y Estela Serrano. A fs. 198 se encuentra acompañada cédula diligenciada de traslado de demanda dirigida a Ricardo Serrano. A fs. 329/330 se corre traslado de la demanda al Sr. José Serrano.

En fecha 12/09/2017 (fs. 490/491), la parte actora desiste de la demanda incoada en contra de Francisco Serrano y Graciela Serrano.

**3. Contestación de demanda Estela Serrano y Angela Serrano.** Por escrito de fecha 26/07/2010 (fs. 228/235), se apersona Estela Serrano y Ángela Isabel Serrano y contestan demanda. Niegan todos los hechos y derechos expuestos por la parte actora en su demanda, salvo los expresamente reconocidos.

En su verdad de los hechos, señalan que el Sr. José Serrano fue padre de seis hijos, siendo éstas hijas del fruto de su relación con la Sra. María Isabel Romero. Los cuatro hijos restantes (otros demandados) fueron concebidos con su primera esposa, la Sra. Gracia Diaz. Hacen notar que la Sra. Diaz abandonó a su padre y sus hijos y luego de divorciarse del Sr. Serrano, su madre (Sra. Romero) fue quien se encargó de criar a todos los demandados. Aclaran que la Sra. Romero tenía dos hijos de una relación anterior, siendo uno de ellos el actor de autos.

Aclaran ello, en tanto manifiestan que en los procesos penales y civiles los otros co-demandados refieren que el Sr. Romero era hijo natural del Sr. Serrano, lo cual califican de falso. Señalan que éstas conocen a quien fuera padre del mismo.

Expresan que los co-demandados invocan que el actor era hijo del Sr. Serrano sólo en los procesos que les conviene, ya que en el sucesorio del Sr. Serrano, la Sra. Gracia Diaz se apersona como su esposa y nada dice de la sentencia de divorcio y, a su vez, denuncia como hijos del causante únicamente a sus cuatro hijos sin hacer referencia a Estela Serrano, Angela Serrano y mucho menos al Sr. Romero. En virtud de ello, requieren que no se tengan en cuenta esos dichos. Agregan que del acta de nacimiento acompañada por el propio actor, se acredita cabalmente su identidad y quien eran sus padres.

Continúan su relato, exponiendo que los otros hijos de su padre siempre se mostraron resentidos hacia su madre y volcaron todo su resentimiento hacia el actor, ya que siempre acompañaba a su padre, mostraba deseos de estudiar, superarse, invertir y hacer negocios y era puesto como ejemplo. Precisan que al fallecimiento de su padre, quien estuvo internado por semanas, ninguno de los codemandados se acercaron e iniciaron su sucesión transcurridos diez días de su fallecimiento.

Señalan que en el sucesorio se designó al co-demandado Ricardo Serrano como administrador del mismo y que su parte se opuso, pero por una cuestión numérica, la decisión de los demás herederos se impuso y quedó designado como administrador provisorio con las responsabilidades de ley, que sostienen no puede extenderse a ésta parte.

Indican que el inmueble rural ubicado en la localidad de "Isca Yacu", nunca formó parte del acervo sucesorio de su padre. Indican que si bien los restantes codemandados lo denunciaron como bien del sucesorio, de los informes surgió que dicho inmueble era de pertenencia del actor por un juicio de prescripción adquisitiva.

Advierten que nada de ello importó a los demás codemandados quienes ingresaron a la fuerza con armas de fuego, conforme surge de la causa penal, echaron a quien detentaba el carácter de arrendatario (Sr. Seiler), se apropiaron de cosechas y cultivos y lo ocuparon y explotaron durante 45 meses en su exclusivo beneficio. Refieren que las cosechas tienen un valor superior a los \$300.000 anuales.

Exponen que en sede penal el Sr. Ricardo Serano expresó que el ingreso fue en carácter de administrador del sucesorio para proteger los bienes. Al respecto, manifiestan que: 1) Éste nunca tuvo autorización para proteger ningún bien del sucesorio y menos uno que no formaba parte del mismo; 2) Los hechos de violencia no pueden ser extendidos a su parte, cuando su accionar delictivo no estuvo avalado por una autorización; 3) Los demás co-herederos si son

responsables porque iniciaron acciones judiciales tendientes a obtener una propiedad que no era de su padre. Indica que invocaron periciales, denuncias e inspecciones oculares ficticias y nunca se presentaron en el juicio de prescripción adquisitiva; 4) de los procesos penales surgen que no sólo fue el demandado quien usurpó la propiedad sino que los otros hermanos colaboraron, en tanto las cosechas eran guardadas en las propiedades de los otros hermanos y a disposición del sucesorio.

Expresan que los otros codemandados estuvieron casi cuatro años usufructuando las ganancias y supuestamente lo hacían en resguardo de los derechos del sucesorio e invita a que en dicho proceso se observe si hay una referencia donde está las ventajas de la usurpación de la propiedad. Añaden que la Sra. Miriam Mercedes Jerez, nuera del Sr. Ricardo Serrano, realizaba la comercialización de dichos productos, a quien refiere como supuesta arrendataria del campo usurpado. Refiere que la actitud de los otros co-demandados es normal, en tanto no es la primera vez que usurpan un campo y lo explotan.

Informan que en la actualidad en el proceso sucesorio de su padre, él mismo ha sido destituido de su función de administrador no sólo por esta cuestión sino por la ocupación sistemática de todos los bienes de su fallecido padre, en beneficio de él y sus hermanos y en detrimento de su parte.

En cuanto los ataques personales que el actor refiere haber sufrido por parte de los codemandados, manifiestan que su parte continúa manteniendo diálogo con sus hermanastros, viven en una localidad pequeña donde todo es conocido. Por ello, indican que las agresiones que manifiesta el actor son verídicas. Refiere hechos ocurridos en el año 2003 en la Expo Tucumán y luego en el año 2008 en calle Santiago y 25 de Mayo, luego de enterarse del inicio de ésta demanda. Expresa que insultan permanentemente no sólo al actor sino a su madre, llegando a hacerlo a su parte lo que fuera detenido por sus cónyuges.

Concluyen indicando que la demanda no puede prosperar en su contra, ya que ninguna de las acciones señaladas que generaron daños al actor, han sido realizadas por éstas y con respecto a la inacción que manifiestan se explica en razón de que el bien usurpado no estuvo inscripto a nombre de su padre y no podía su parte hacer presentaciones en el sucesorio respecto a dicho bien. Sostienen que su obligación legal fue poner en conocimiento del juez las cartas documento recibidas en donde se las notificara de la usurpación.

Por lo expuesto, solicita el rechazo de la acción respecto a su parte y la aplicación de costas por su orden. Ofrecen prueba instrumental.

Por proveído de fecha 30/07/2010, se tiene por contestada la demanda por Estela Serrano y Ángela Isabel Serrano.

#### **4. Apersonamiento y planteo de Excepciones de Ricardo Serrano.**

En fecha 12/08/2010 (fs. 275/280), se apersona el letrado Bernardo Sassi en el carácter de apoderado de Ricardo Serrano, conforme poder acompañado a su presentación, e interpone excepción de previo y especial pronunciamiento.

Justifica sus excepciones. Refiere que fue designado administrador del sucesorio de su padre y en tal carácter toma posesión de los bienes del acervo hereditario. Que como consecuencia de la toma de posesión, el Sr. Romero denuncia a su mandante penalmente por usurpación y sostiene que en dicha causa fue sobreseído. Por su parte, expresa que en la causa penal “Gracia Diaz de Serrano s/denuncia”, hoy caratulada como “Politti Mattar Victor Raúl y otro s/Defraudación y Estafa. Expte. 23805/03” por una pericial caligráfica se determinó que la firma inserta correspondiente a la cesión de acciones y derechos posesorios de fecha 10/12/2002 no pertenece a la mano caligráfica del señor que en vida solía llamarse José Serrano. Por lo que sostiene que, aquel instrumento en el que el actor se basó para iniciar juicio de prescripción, resulta falso. Añade que la posibilidad de redargüir de falsedad se encuentra abierta para el Sr. Serrano. Por ello, plantea prejudicialidad y litispendencia, en tanto en la última causa penal mencionada, el hoy demandado detenta el rol de querellante y actor civil en contra del actor.

Asimismo, opone excepción de prescripción liberatoria. Expresa que el art. 4037 fija en dos años el plazo de prescripción por responsabilidad extracontractual, que sería la figura empleada por el actor para calificar la conducta de su mandante. De ello, sostiene que el rubro lucro cesante, estaría parcialmente prescripto. Advierte que el actor reclama por dicho rubro 45 meses que habría durado la usurpación por el Sr. Serrano, tomando como inicio el 10/10/2003. Indica que el plazo para computar la prescripción sería el de la interposición de la demanda ocurrida el 19/02/2008, que al retrotraerse 24 meses sólo podría reclamarse hasta febrero de 2006. En consecuencia, señala que sólo podrá reclamarse por el rubro lucro cesante 13 meses, que es el resultado de restarle a los 24 meses los 9 meses transcurridos desde el cese de la inexistente usurpación.

Ofrece prueba y acompaña documentación original, la que se reserva en fecha 31/08/2010 (fs. 281).

En fecha 22/10/2013 (fs. 423), el letrado Bernardo Sassi renuncia a la representación de autos. Por escrito de fecha 20/05/2014 (fs. 435), se apersona el demandado con el patrocinio letrado Miguel Marcotullio.

En fecha 11/12/2015 (fs. 460/466), el actor contesta las excepciones planteadas. Por proveído de fecha 16/12/2015 (fs. 467), la excepción de litispendencia pasa a despacho para resolver y se reserva la excepción de prescripción para definitiva.

Por resolución de fecha 27/07/2016 (fs. 468), se rechaza la excepción de litispendencia y se reserva para definitiva la prejudicialidad.

Por proveído de fecha 13/02/2017 (fs. 482) se reabren los plazos para contestar demanda. Notificado el Sr. Ricardo Serrano (fs. 484), el mismo no contesta demanda. Por escrito de fecha 02/03/2018 (fs. 505), se apersona el demandado con el patrocinio letrado de la Dra. Nancy Lia Albero.

**5. Trámite de la causa a definitiva.** Por decreto de fecha 02/10/2017, se abre la causa a prueba. Por informe actuarial de fecha 27/12/2018 (fs. 654), se ordena la agregación de las pruebas producidas, con el siguiente detalle: *A las pruebas del actor:* Instrumental: producida; Informativa: parcialmente producida; Informativa: producida; Informativa: parcialmente producida; Confesional: producida; Testimonial: parcialmente producida. *A las pruebas de la parte demandada:* Instrumental: producida.

En fecha 29/04/2019 (fs. 656), la causa es puesta para alegar. El actor alega en fecha 20/05/2019 (fs. 667/691) y el demandado Ricardo Serrano lo hace en fecha 07/06/2019 (fs. 693/699). Agregados los alegatos presentados (fs. 701, 08/10/2019), se practica planilla fiscal (fs. 702, 23/10/2019), eximiendo de su pago al demandado Ricardo Serrano en virtud del beneficio concedido en fecha 14/08/2018 (incidente I2). Asimismo, en fecha 13/12/2019 el actor repone el total de la planilla fiscal confeccionada en autos.

Por providencia de fecha 17/12/2019, los autos son puestos para sentencia. En fecha 26/05/2020, se dispone como medida para mejor proveer la remisión de las causas penales y civiles allí mencionadas. Cumplida la medida, en fecha 08/09/2023 vuelven los autos a despacho para resolver. Por decreto de fecha 19/12/2023, se hace conocer a las partes que el proveyente entenderá en la presente causa.

Y,

#### **CONSIDERANDO:**

**1. Las pretensiones. Los hechos.** El actor entabla demanda de daños y perjuicios por la suma de \$413.612 en concepto de daño emergente, lucro cesante y daño moral con más los intereses gastos y costas o lo que en más o en menos surja de las circunstancias de autos, en contra de Ricardo Serrano, José Serrano (h), Ángela Isabel Serrano y Estela Serrano.

Señala que en virtud de un juicio de prescripción adquisitiva, para el cual utilizó una cesión de derechos realizada en su favor por el Sr. José Serrano, adquirió la titularidad de un inmueble ubicado en "Isca Yacu", departamento Jimenez, provincia de Santiago del Estero. Refiere que fallecido el cedente, el Sr. Ricardo Serrano, en el carácter de administrador provisorio del sucesorio, ingresó en fecha 07/10/2003 al inmueble de su propiedad y lanzó por la fuerza al Sr. Santiago Seiler quien era arrendatario de dichas tierras. Expone que inició una causa penal de usurpación y que en el año 2007 inició un juicio de reivindicación, ambas en los tribunales de Santiago del Estero. Informa que en fecha 18/05/2007, en virtud de una medida cautelar dictada en éste último juicio, se produjo el desalojo del Sr. Ricardo Serrano del inmueble citado.

Afirma que recibió amenazas y agresiones físicas por parte del demandado en dos oportunidades. Asimismo, sostiene que en dicho lapso se vió privado de obtener ingresos por el arriendo de la tierra. Que tuvo que afrontar diferentes gastos (por las causas iniciadas por él mismo y para defenderse de las incoadas en su contra) lo que derivó en su insolvencia y la venta del inmueble en fecha 01/08/2007. Señala que las demandadas Estela y Angela Serrano, informaron al sucesorio lo ocurrido. Sin perjuicio de ello, sostiene que los herederos son responsables por cuanto la administración de la sucesión representa un mandato, iniciaron causas en su contra y pese a haber tomado conocimiento de la situación no solicitaron medidas al Juez pertinente. Por su parte, destaca que no es hijo del Sr. José Serrano.

De su lado, las demandadas Angela y Estela Serrano, reconocen la ocupación del inmueble por parte del Sr. Ricardo Serrano y las agresiones y amenazas sufridas por el actor en autos. Coinciden en que el actor en autos no fue hijo del Sr. José Serrano. Sin embargo, sostienen que no se encuentran incursas en responsabilidad por los daños causados en tanto dicho bien no formó parte del sucesorio, no iniciaron causas en contra del actor e informaron la usurpación a la sucesión.

A su turno, el demandado Ricardo Serrano plantea únicamente excepciones y no contesta demanda. Al justificar las mismas, señala que fue sobreseído de la causa de usurpación y plantea prejudicialidad en razón de una causa iniciada en contra del actor en la que, entre otros motivos, se lo demanda por el delito de estafa por la cesión efectuada por su padre. Por su parte, plantea excepción de prescripción del rubro lucro cesante, por haber transcurrido el plazo de 2 años fijado por el art. 4037 del CC.

De lo expuesto, no se haya cuestionado que por sentencia de fecha 18/09/2003 el Sr. Ricardo Serrano fue designado administrador provisorio de la sucesión de José Serrano (conf. los dichos y copias acompañadas por las partes, lo que resulta coincidente con la resolución de fecha 18/09/2003 a fs. 138 del expediente sucesorio digitalizado en autos en fecha 30/05/2023). Asimismo, tampoco se encuentra controvertido el ingreso por parte del Sr. Ricardo Serrano al inmueble ubicado en Isca Yacu, en virtud de lo señalado por el actor, reconocido por las Estela y Angela Serrano y lo señalado por el propio Ricardo Serrano al momento de plantear sus excepciones.

En tanto que, la controversia se centra respecto a determinar si dicha ocupación del inmueble por parte del Sr. Ricardo Serrano, ocurrida en el período transcurrido señalado por el actor fue legítima y, en su caso, la existencia de responsabilidad de los restantes herederos por los actos desplegados por el Sr. Ricardo Serrano. Hechos controvertidos sobre los que deberá versar la prueba, para finalmente determinar si surgen acreditados los presupuestos fácticos y jurídicos necesarios para la procedencia de la acción intentada.

**2. Ley aplicable.** Trabada la litis del modo expuesto, con carácter previo, dejo sentado que a partir del 1 de agosto de 2015 ha entrado en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN).

Sentado ello, tengo que en autos los hechos ventilados (ocupación 07/10/2003 y restitución del bien inmueble en junio de 2007), han acaecido durante la vigencia del Código Civil derogado. Por consiguiente y con excepción de ciertas normas puntuales de la nueva legislación que resultan inmediatamente aplicables -según se expondrá en cada caso-, la cuestión debe juzgarse a la luz de la legislación derogada, que mantiene ultra actividad en este supuesto (cf. art. 7 CCCN y art. 3 del CC).

Ello, sin perjuicio de considerar al nuevo digesto como doctrina interpretativa o fuente no formal del derecho, toda vez que vino a positivizar los principios jurisprudenciales y doctrinarios de los últimos treinta años.

**3. Prejudicialidad.** En cuanto a la prejudicialidad penal, de los hechos ventilados, surgen diferentes causas penales de las cuales corresponde su análisis.

Por un lado, el demandado señala la existencia de una causa penal en contra del actor en donde los demandados habrían iniciado acciones por considerar que el instrumento en el que el actor se basó para adquirir el inmueble (cesión de José Serrano a Carlos Romero) y que fuera utilizado en el juicio de prescripción,

sería falso. Así las cosas, tengo que de la causa caratulada “Politti Mattar Víctor Raúl, Romero María Isabel y/o Serrano Susana y Otros s/Defraudación. Expte. 23805/2003” que tramitara ante el Juzgado de Instrucción N° IV surge que por resolución del 29/10/2019 (fs. 802/803) se dispuso declarar de oficio la extinción de la acción penal al haberse operado la prescripción (arts. 59 inc. 3° y 62 inc. 2° del Código Penal). En consecuencia, se dispuso el sobreseimiento de Politti Mattar Víctor Raúl, Romero María Isabel, Romero de Fusilieri Susana, Serrano Estela, Serrano Angela Isabel, Romero Carlos Alberto (actor en autos) y de Lidia del Valle Pardo por el delito de defraudación en perjuicio de Ricardo Serrano, Francisco Serrano, Jose Serrano (h) y Graciela Serrano por el hecho ocurrido el 30/12/2002 (art. 359, inc. 4° CPP).

Por su parte, el actor señala que en dos oportunidades fue agredido físicamente por el demandado Ricardo Serrano. En relación a ello, señala la existencia de dos causas penales.

De la primera primera causa, requeridos los autos “Serrano Ricardo S. S.D Usurpación de Propiedad, Daño, Retención Indebida y Robo (art. 181, 183, 173 inc. 2 y 164 del CP) en perjuicio del Sr. Carlos Romero. Expte. 171/03” conforme contestación de oficio (fs. 527), el Juzgado del Crimen de la Localidad de Las Termas Provincia de Santiago del Estero informa la imposibilidad material de remitir la causa citada en virtud de que luego de la búsqueda no fue habida (véase fs. 528). Al respecto, advierto que el hecho causa del presente juicio ocurrió hace más de 21 años (año 2003), por lo que el tiempo transcurrido sin el dictado de una sentencia definitiva podría ocasionar a los actores una privación de justicia de gravedad (art. 1775 inc. b del actual CCCN). Todo ello, sumado a la circunstancia de que el demandado Ricardo Serrano señala haber sido sobreseído por resolución de fecha 11/09/2007 en dicha causa, por idénticos motivos a las causas citadas precedentemente conforme surge de las copias acompañadas al momento de interponer excepciones (véase fs. 313/314).

De la segunda causa penal, tengo que en los autos “Serrano Ricardo Oscar s/Lesiones. Víctima: Carlos Alberto Romero. Expte. 8658/2008. Fecha del hecho: 27/02/2008” que tramitara por ante la Fiscalía de Instrucción en lo Penal VII° Nominación, surge que en fecha 27/11/2012 se declara extinguida la acción penal al haberse operado la prescripción (arts. 59 inc. 3°, 62 inciso 2° del CP) y se dispone el sobreseimiento del Sr. Ricardo Oscar Serrano por el delito de lesiones leves (art. 89 CP) en perjuicio de Romero Carlos Alberto, art. 359 inc. 4° del Código Procesal Penal (véase págs. 223 de la causa digitalizada adjunta por nota actuarial de fecha 28/03/2023 en los presentes autos).

Es así que los sobreseimientos recaídos por prescripción de las acciones penales, no impiden el dictado de una sentencia en sede civil, en tanto no recayó sentencia absolutoria en los términos del art. 1103 del CC (actual art. 1776 del CCCN). En igual sentido, se ha dicho que “Resulta así que para que la sentencia absolutoria produzca los efectos de la cosa juzgada en sede civil, es preciso que tenga un contenido o sustancia determinados, es decir, que se funde en la inexistencia del hecho o en la negación de la autoría del imputado, pues si la absolución se basa en otros motivos -falta de culpa, prescripción de la acción, u otros- carecerá de incidencia en la acción civil posterior” (Cámara Civil y Comercial Común Concepción Sala I, sentencia n° 214, fecha sentencia 16/09/2021, Expte. 238/12).

Por lo expuesto, el caso traído a análisis no queda encuadrado dentro de las disposiciones del art. 1103 del Código Velezano, siendo posible su examen en sede civil, en el cual pueden valorarse las circunstancias fácticas de la ocupación del inmueble por parte del Sr. Ricardo Serrano y los daños y perjuicios que se habrían ocasionado por ello al actor en autos.

**4. Excepción de prescripción liberatoria parcial.** El demandado Ricardo Serrano, expresa que el art. 4037 fija en dos años el plazo de prescripción por responsabilidad extracontractual y que ésta sería la figura empleada por el actor para calificar la conducta de su mandante. De ello, sostiene que el rubro lucro cesante, estaría parcialmente prescripto. Advierte que el actor reclama por dicho rubro el valor locativo de 45 meses, es decir por el tiempo que habría durado la usurpación por el Sr. Serrano, tomando como inicio el 10/10/2003. Indica que el plazo para computar la prescripción sería el de la interposición de la demanda (19/02/2008) y que, al retrotraerse 24 meses sólo podría reclamarse hasta febrero de 2006. En consecuencia, señala que sólo podrá reclamarse por el rubro lucro cesante 13 meses (resultado de restarle a los 24 meses los 9 meses transcurridos desde el cese de la “inexistente” usurpación en junio del 2007).

A su turno, el actor solicita el rechazo de la excepción de prescripción parcial incoada. Señala que en el caso, debe tenerse en cuenta la sentencia que puso fin al juicio, ya sea la acción penal y la acción civil de reivindicación, lo que da origen a una acción a la actio iudicati -derecho de exigir el cumplimiento de una sentencia- y se halla sujeta a la prescripción decenal desde que la sentencia queda firme, aunque la acción original fuere menor. A su vez, considera pertinente realizar un análisis de la causal de suspensión de la prescripción dispuesto por el art. 3982 bis. En tal sentido, señala que el presupuesto para el cese de la suspensión del

plazo no es la deducción de la demanda civil o su conclusión por un modo anómalo, sino la conclusión del proceso penal o desistimiento de la querella, lo que sostiene que no ocurrió en el caso. Señala que el tiempo transcurrido en la duración de dicha causa, es inútil para prescribir y, desaparecida ella, el curso se reanuda. Sostiene que el demandado al plantear su excepción reconoce que el lucro cesante existe, solo que unilateralmente toma un plazo a partir del cual debe computarse el mismo.

Sentado ello, cabe señalar que el lucro cesante se configura con la pérdida del enriquecimiento patrimonial razonablemente esperado, o sea la frustración de las ventajas, utilidades, ganancias o beneficios de los que se privó al damnificado. En autos, el actor reclama lo que dejó de percibir con motivo de la privación ilegítima del uso del inmueble durante 45 meses y, considerando que los cultivos y la extensión del mismo, estima un valor locativo anual. Dicho valor, se traduce en los frutos que hubiera recibido en dicho lapso, por los campos en cuestión.

Así las cosas, nuestra Corte Suprema de Justicia, como doctrina legal establece que “Resulta descalificable como acto jurisdiccional válido, y violatoria de la garantía de la defensa en juicio, la sentencia que declara prescripto el derecho de la actora, sin un previo análisis de cuestiones expresamente propuestas, que eran conducentes para una recta solución de la causa. No configura derivación razonada del Derecho vigente, la sentencia que aplica los plazos de prescripción propios de la responsabilidad extracontractual, a la obligación de restituir los frutos percibidos por el poseedor de mala fe” (CSJT, sentencia n° 1686, fecha sentencia 29/12/2016). En dicho pronunciamiento, se ha dicho que “Como bien se ha señalado (GONZALES BARRÓN: Más allá de la reivindicatoria: Los frutos, la indemnización, y las mejoras, cit.), el poseedor reembolsa los frutos (incluso civiles), independientemente de los daños producidos sobre la cosa misma, y por lo tanto el supuesto de hecho estatuido por la norma, no configura un supuesto de responsabilidad aquiliana... Tenemos aquí un supuesto de acto ilícito, por derivar de la intromisión sobre cosa de otro, pero que genera una consecuencia diversa a la responsabilidad aquiliana [...] De allí que, contra lo resuelto por la sentencia, resulten aplicables al sub lite aquellos principios sentados en Fallos, 316:871. En dicha causa, el Dr. Boggiano sostuvo que: “La obligación de restituir los frutos percibidos por el poseedor de mala fe no se funda estrictamente en la conducta ilícita y extracontractual del deudor sino que reconoce como causa jurídica al derecho de propiedad, por lo que no puede atribuírsele naturaleza aquiliana, resultando aplicable el plazo ordinario de prescripción del art. 4023 del Código Civil”...”.

Es así que, resulta aplicable el plazo decenal señalado, el que advierto no se encuentra cumplido en autos para la admisión de la excepción interpuesta por el demandado, como así tampoco el plazo de dos años pretendido por éste, conforme los antecedentes que procedo a señalar.

En primer lugar, tengo que el ingreso al inmueble ubicado en Isca Yacu, se habría producido en fecha 07/10/2003 (cf. lo sostenido en la demanda, lo informado por el arrendatario Sr. Seiler en el juicio sucesorio fs. 153/154 e inicio de la causa de usurpación). Asistiendo razón al actor, en virtud del art. 3982 bis del CC, los plazos se encontraban suspendidos con el inicio de la causa penal de usurpación iniciada en el año 2003, que habría finalizado en el año 2007 (cf. punto 3 del presente decisorio).

Por su parte, tengo que el actor inició acción reivindicatoria en fecha 11/04/2007 en el marco de la causa “Romero Carlos Alberto c/Serrano Ricardo y/u Otros S/ Reviindicación. Expte. 336.245” hoy “Jerez Miguel Alejandro c/ Serrano Ricardo. Expte. 336.245 que tramitó en la provincia de Santiago del Estero (véase cargo de fs. 34 de dicha causa, reservada por Secretaría a fs. 526 de los presentes autos). En dicho proceso, se dictó una medida cautelar innovativa que ordenaba la restitución del inmueble referenciado, produciéndose el desalojo efectivo del inmueble en fecha 20/06/2007 (cf. resolución dictada en fecha 19/05/2007 obrante a fs. 40 y constancias de fs. 44 y 176/178 de dichos autos). Luego, el actor inició la presente demanda en fecha 19/02/2008 (cf. cargo de mesa de entradas de fs. 20) y reclamó lucro cesante por el tiempo en que no pudo disponer del bien.

Por todo lo expuesto, no encontrándose cumplido el plazo de prescripción liberatoria parcial respecto del rubro lucro cesante reclamado en autos y por ello, corresponde desestimar la excepción incoada por el demandado Ricardo Serrano.

**5. Encuadre Jurídico.** Resueltas las consideraciones precedentes, a los fines de analizar la cuestión de fondo, corresponde que preliminarmente me refiera a la normativa aplicable al caso en función de los derechos y bienes jurídicos implicados.

En autos se reclama lucro cesante, daño emergente y daño moral derivado de la ocupación indebida del inmueble de titularidad del actor. Así las cosas, tengo presente que la acción que aquí se persigue, se encuentra determinada por el efectivo perjuicio que pudo haber sufrido el actor ante el incumplimiento por parte del demandado de la obligación de restituir y la retención indebida del inmueble, en tanto se sostiene que el Sr. Ricardo Serrano poseyó el inmueble y por ello tuvo que iniciar acciones tendientes a su recuperación.

Así las cosas, tengo que la posesión será ilegítima cuando se tenga el bien sin título y, por su parte, la misma puede ser de buena o mala fé (arts. 2355, 2356 CC). Al respecto, “Tratándose de inmuebles, basta con que el poseedor carezca de justo título para que sea considerado de mala fé, ya que tal circunstancia excluye la creencia, sin duda alguna, de ser el exclusivo propietario de la cosa” (Código Civil anotado, Salas - Trigo Represas, Vol. II, arts. 1137 a 3261, pág. 599). Asimismo, el poseedor de mala fé está obligado a entregar o pagar los frutos de la cosa que hubiese percibido, y los que por su culpa hubiera dejado de percibir (art. 2438 del CC).

Por su parte, en virtud de lo dispuesto por el art. 1068 del CC, habrá daño siempre que se causare a otro algún perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria, o directamente en las cosas de su dominio o posesión, o indirectamente por el mal hecho a su persona o a sus derechos o facultades. Por ello, todo el que ejecuta un hecho, que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio (art. 1109 del CC). En materia de atribución de responsabilidad, partiendo de los presupuestos que en general se mencionan para que se configure este deber de resarcir civil (daño, relación causal, antijuridicidad y factor de atribución), el damnificado tiene la carga de probar el daño y que ese daño - cuya reparación se pretende- se encuentra en relación causal adecuada con el hecho al cual se atribuye su producción. Y, la prueba del daño y de la relación causal, cuando menos en su fase primaria, puramente material, incumbe al pretensor.

Ahora bien, siendo que la ocupación del inmueble fue realizada por el administrador del sucesorio, en cuanto a su responsabilidad y la de los herederos tengo que “El administrador del sucesorio es un mandatario de los herederos, cuya función se explica por la necesidad de concertar en una sola persona responsable, la realización de ciertos actos indispensables en el manejo de los bienes. El art. 693 del C.P.C. y C. (actual 632 texto consolidado ley 8.240) establece que se le concederán las autorizaciones necesarias para su cometido. Del mismo digesto procesal se entiende que al administrador le competen las facultades del mandato concebido en términos generales, tiene únicamente para realizar los actos conservatorios de los derechos e intereses de la comunidad hereditaria, fuera de ellos se requiere el consentimiento unánime de todos los herederos o en su defecto la decisión judicial. LL 1.981-B-307. (CCDL, Sala 2, Sent. N° 206, fecha: 07/09/1995).” (Cámara Civil en Documentos y Locaciones - Concepción- Sentencia n° 12/04/2016 - sentencia n° 44). De manera concordante, lo prescriben los artículos 2699 a 2703 y 3451 del Código Civil.

Determinados los presupuestos necesarios para la procedencia de la acción intentada, corresponde analizar en lo que sigue si en la causa en análisis estos concurren, bajo la normativa señalada y conforme las pruebas aportadas por las partes.

**6. Cuestión de fondo. Las pruebas.** En función del encuadre normativo dado y de los hechos controvertidos (puntos 1, 2 y 5 de este decisorio), corresponde determinar en primer lugar la existencia del hecho que da origen a los daños y perjuicios que aquí se reclaman, es decir, si la ocupación del Sr. Ricardo Serrano del inmueble ubicado en “Isca Yacu” en la provincia de Santiago del Estero en fecha 07/10/2023 hasta el mes de junio de 2007, fue indebida. En esta tarea, corresponde analizar las pruebas rendidas en autos.

En primer lugar, de la prueba informativa A3) tengo presente el informe de dominio remitido por el Registro Inmobiliario de la provincia de Santiago del Estero (fs. 536, pág. 261/262 del tercer cuerpo digitalizado), del cual surge que el titular del inmueble en el período en que se dió la ocupación correspondía al actor en autos. Es así que, tengo que el inmueble identificado con matrícula n° 12-1514 ubicado en Isca Yacu, departamento Jimenez, registra en su asiento 1 como titular de dominio a Carlos Alberto Romero quien adquirió el inmueble por prescripción adquisitiva veinteañal por Expte. 236.176 del año 2003 en los autos “Romero Carlos Alberto c/Gobierno de la Provincia y otros s/Prescripción Adquisitiva.” con fecha de protocolización de la sentencia 06/12/2004. Luego, el titular de dominio pasó a ser el Sr. Jerez Miguel Alejandro, quien conforme lo sostenido por el actor y lo que surge del asiento n° 4 del informe referenciado, compró dicho inmueble en fecha 01/08/2007.

Por lo que, si bien la presente demanda data del año 2008, el titular del inmueble durante el tiempo que habría durado la ocupación por parte del Sr. Ricardo Serrano, fue el Sr. Carlos Romero -actor en autos-.

Ahora bien, conforme fue expuesto al momento de analizar la prescripción (punto 4 de este decisorio, al que me remito en honor a la brevedad), la ocupación del inmueble por el demandado en autos -Sr. Ricardo Serrano- data del 07/10/2003 (lo que resulta coincidente con lo afirmado por éste en la prueba confesional A5, véase posición 2, fs. 572) y su restitución operó en fecha 20/06/2007 en virtud del cumplimiento de la medida cautelar dictada en fecha 19/05/2007 en los autos “Romero Carlos Alberto c/Serrano Ricardo y/u Otros S/ Revindicación. Expte. 336.245” hoy “Jerez Miguel Alejandro c/ Serrano Ricardo s/Reivindicación. Expte.

336.245” (coincidente con lo afirmado en la séptima posición de la prueba confesional A5).

Al respecto, tengo presente que conforme surge de la sentencia de fondo de fecha 14/02/2011 dictada en la causa citada precedentemente (fs. 611/613 de dicha causa), la acción reivindicatoria promovida por Carlos Alberto Romero -y continuada por el Sr. Jerez- prosperó. En consecuencia, en dicho pronunciamiento, se tuvo por firme la restitución del inmueble ordenada por medida cautelar.

En base a los antecedentes señalados, la posesión del inmueble detentada por el Sr. Ricardo Serrano desde el 07/10/2003 hasta el 20/06/2007, resulta ilegítima en tanto el bien se encontraba en su poder de manera injustificada al no contar con título suficiente y, en consecuencia, resultó ser de mala fé (arts. 2355, 2356 CC).

Sumado a ello, tengo que lo afirmado por el actor resulta concordante con los restantes elementos probatorios arrojados a la causa, en tanto no se vislumbra otra causal que permita derribar la mala fé en la ocupación del Sr. Ricardo Serrano y/o desacreditar la titularidad del inmueble en cabeza del Sr. Carlos Alberto Romero.

Ello así, ya que pese a que el demandado Ricardo Serrano en la prueba confesional A5 (véase posición 2, fs. 571/572) afirma que la propiedad del inmueble era de su padre y de sus hermanos y que el actor falsificó la firma de su padre para adueñarse de la misma, tales manifestaciones no resultaron acreditadas en autos. En efecto, el actor en su demanda también relata una denuncia efectuada por la Sra. Gracia Diaz (ex esposa del cedente del inmueble, Sr. José Serrano) y una demanda de redargución de falsedad, ambas en contra del actor por medio de las cuales parte de los demandados intentaron derribar la cesión utilizada como base en el juicio de prescripción adquisitiva para la adquisición del inmueble, respecto de las cuales no consta pronunciamiento favorable.

Es así que, conforme ya fuera expuesto en el punto 3 de este decisorio, el actor en autos resultó sobreseído en la causa penal “Politti Mattar Victor Raul, Romero María Isabel y/o Serrano Susana y Otros s/Defraudación. Expte. 23805/2003”, originada en la denuncia de la Sra. Gracia Diaz e incoada por parte de los demandados.

Por su parte, sin perjuicio de que la causa “Gracia Diaz de Serrano c/Politti Mattar Victor Raul y Otros s/ Redargución de Falsedad. Expte. 2489/03” que tramitó por el Juzgado Civil y Comercial Común de la V° Nominación no pudo ser remitida (cf. lo informado por dicho Juzgado en la prueba informativa A4 a fs. 552), la misma pudo ser compulsada la misma en el sistema SAE en la página web de este Poder Judicial. Al respecto, tengo que los demandados (Ricardo Serrano y Jose

Serrano hijo) si bien plantearon redargución de falsedad del instrumento de cesión celebrado entre su padre y el actor en autos (véase fs. 119/124, de dichos autos), tal proceso concluyó por caducidad de instancia en virtud de la resolución dictada en fecha 12/12/2012.

En base a lo expuesto, tengo entonces que las causas incoadas en contra del actor no prosperaron y ello, aunado a la prueba del informe de dominio y la acción reivindicatoria que sí prosperó en favor del actor, me permite concluir que la ocupación del inmueble por parte del Sr. Ricardo Serrano, en perjuicio del titular dominial y actor en autos, resultó a todas luces ilegítima. Sentado ello, tengo que razonablemente existe un perjuicio al actor, en tanto el mismo se vió privado del ejercicio de su derecho de propiedad y, para recuperar la posesión del inmueble, tuvo que iniciar acciones judiciales (denuncias en sede penal y luego acción reivindicatoria).

Sentado ello y continuando el análisis de las pruebas de autos, a los fines de determinar la atribución de responsabilidad por el perjuicio causado, tengo presente que el actor y el demandado, coinciden en que el ingreso al inmueble por éste último fue en el carácter de administrador del sucesorio del Sr. José Serrano. Por ello, cabe analizar si conforme lo pretendido por el actor, los herederos del Sr. José Serrano son responsables por los daños causados, o si por el contrario, la ocupación del inmueble por parte del Sr. Ricardo Serrano fue realizada a título personal y por derecho propio (cf. lo pretendido por Estela y Angela Isabel Serrano).

En esta tarea, cobra relevancia las constancias del juicio sucesorio ofrecido como prueba informativa (A4) y que tramitara ante el Juzgado de Familia y Sucesiones de la VIII° Nominación bajo la causa caratulada "Serrano José s/ Sucesión". Expte. 74/03" (causa agregada en formato digital en fecha 30/05/2023), las que paso a detallar.

De dicha causa, surge que en fecha 18/09/2003 se dictaron dos resoluciones, la primera que declara como herederos del Sr. José Serrano a Ricardo Serrano, Francisco Serrano, Graciela Serrano, José Serrano (h), Ángela Serrano y Estela Serrano, en el carácter de hijos (véase fs. 137 de dicha causa). En igual fecha, se dictó una segunda resolución (fs. 138) en donde se designa administrador provisorio y custodio del caudal hereditario al Sr. Ricardo Serrano, en virtud del acuerdo de la mayoría de los herederos y pese a la oposición de las herederas Ángela y Estela Serrano (véase acta de fs. 83).

Luego, a fs. 153/154 del sucesorio, consta un escrito del apoderado de Santiago Eduardo Seiler, quien fuera arrendatario del inmueble ubicado en Isca Yacu provincia de Santiago del Estero (conf. surge de la copia del instrumento de

cesión que obra a fs. 23 de la presente causa sujeta a resolución, expte. 179/08) y, a su vez, de un inmueble ubicado en la localidad de Las Cejas, Cruz Alta provincia de Tucumán (cf. contrato de arriendo acompañado en el sucesorio, a fs. 151). En dicha oportunidad, el Sr. Seiler pone en conocimiento del sucesorio que en fechas 01/10/2003 y 07/10/2003 el Sr. Ricardo Serrano, detentando el carácter de administrador del sucesorio, ingresó por la fuerza a los campos ubicados en Las Cejas e Isca Yacu, respectivamente.

Posterior a ello, a fs. 163 de la referida causa sucesoria, las herederas - aquí demandadas- Estela y Angela Isabel Serrano informan respecto de lo acontecido en cuanto al ingreso del Sr. Ricardo Serrano en los inmuebles referenciados (cf. cartas documento remitidas por el Sr. Seiler) y solicitan al Juzgado que tome las medidas conducentes. En fecha 05/12/2003 (fs.177), el juez del sucesorio dicta medida de no innovar a fin de que el Sr. Ricardo Serrano se abstenga de innovar el estado de hecho y de derecho de los bienes pertenecientes al acervo hereditario sin autorización judicial.

Finalmente, por sentencia de fecha 28/05/2007 (fs. 458/459 del juicio sucesorio), se dispone la remoción del Sr. Ricardo Serrano como administrador provisorio de la sucesión. Resulta importante destacar, que en los considerandos de dicha resolución surge que quienes solicitaron el cese de la administración del Sr. Ricardo Serrano fueron los herederos Estela Serrano, Ángela Serrano, Graciela Serrano y Francisco Serrano, en virtud de las acciones desplegadas y la conducta del entonces administrador y la pérdida de confianza respecto de éste.

Sumado a ello, tengo presente las presentaciones que el Sr. Ricardo Serrano realizó en el juicio sucesorio solicitando autorización para intervenir en diversas causas -incluida la redargución de falsedad en contra del actor- y para la celebración de contratos de arriendo en nombre de la sucesión (véase fs. 143 y 181), lo que no le fue concedido en virtud de no contar con la firma de los demás herederos (véase providencias de fecha 23/10/003 a fs. 144 y 17/12/2003 a fs. 181). De igual manera, tampoco surge autorización judicial alguna que ordene la ocupación del inmueble Isca Yacu en nombre del sucesorio. Además de ello, tengo presente que el inmueble no se encontraba a nombre del Sr. José Serrano (cf. informe de dominio que ya fue analizado).

Todo ello me permite concluir, que la conducta desplegada por el Sr. Ricardo Serrano en lo que hace a la ocupación del inmueble de propiedad del aquí actor, fue a título personal, en tanto no contaba con autorización de los restantes herederos declarados en el sucesorio de su padre.

No contradice tal conclusión, la existencia de una causa penal por el supuesto delito de estafa ni la acción de redargución de falsedad iniciada por los herederos -con excepción de Ángela Serrano y Estela Serrano- en contra del actor, ya que ello no implica que la intervención y/o consentimiento con el ingreso al inmueble que aquí nos ocupa. Mucho menos, considerando que tal ingreso habría sido por la fuerza (cf. los dichos del Sr. Seiler), en tanto la administración provisoria de un sucesorio no habilita tal accionar.

Por lo expuesto, pese a que la administración de la sucesión implica un mandato, en virtud del encuadre jurídico dado (punto 5 de este decisorio), de las constancias de la causa y asistiendo razón a las co-demandadas corresponde (Ángela Serrano y Estela Serrano), considero que no puede atribuir responsabilidad a los restantes herederos del sucesorio del Sr. Jose Serrano, por la ocupación del inmueble de propiedad del actor que fuera realizada por el Sr. Ricardo Serrano, al no contar con autorización expresa de éstos y/o autorización judicial a tal efecto.

Previo a finalizar con el análisis probatorio, valoro que los testimonios vertidos en autos (testimonial A6) guardan similitud con las restantes pruebas rendidas. Al respecto, tengo que en autos declararon Mauro Cristian Molina a fs. 592 (quien afirma conocer al actor por conocidos en común), David Rodolfo Torres Martínez a fs. 593 (quien refiere conocer al actor porque sus padres se encontraban interesados en comprar un campo en el año 2003 de propiedad del actor), Elva Rita Medina a fs. 594 (vecina de la madre del actor), Valeria Jorgelina López a fs. 595 (vecina) y Ramon Hugo Segovia a fs. 628 (contador del actor). Dichos testigos de manera coincidente reconocen la propiedad del actor del inmueble ubicado en Isca Yacu, la ocupación en el año 2003, el inicio de causas para recuperar la propiedad, los problemas psíquicos y temores que habría sufrido el actor y los cambios de residencia del mismo. Asimismo, el testigo Segovia, reconoce el arriendo de la tierra por parte del Sr. Seiler.

Por su parte, las tachas efectuadas deducidas por el demandado Ricardo Serrano (fs. 601/603 y 637/638) basadas en que los testigos mencionados realizaron declaraciones mendaces, parcializadas y en complacencia con los intereses del actor, no han de prosperar. Ello, por cuanto el demandado utiliza prueba documental inconducente (cf. decreto de fecha 12/03/2018, prueba A6), refiere a un contrato de arriendo que no se relaciona con el inmueble de autos, sugiere situaciones que hacen a la vida privada de las partes y no se relacionan con el objeto de la presente causa. En especial, tengo presente que los testigos informan respecto a lo que pudieron llegar a conocer y logran recordar, ya que versan sobre hechos que ocurrieron entre los años 2003 a 2007, es decir entre 11 y 15 años antes

de la fecha de sus declaraciones (2018) lo que justifica las expresiones utilizadas y la cita de fechas aproximadas.

En mérito a ello, por los daños causados respecto de la ocupación indebida del inmueble ubicado en Isca Yacu (provincia de Santiago del Estero) en perjuicio del actor, resulta responsable únicamente el demandado Ricardo Serrano.

**7. Rubros reclamados.** Determinada la responsabilidad, corresponde abordar lo concerniente a la valoración y cuantificación de los rubros o daños reclamados por el actor.

**7.1 Daño emergente.** El actor reclama la suma de \$53.612. Incluye en dicho rubro: **a)** la suma de **\$4.000** por honorarios al letrado Victor Taleb en la causa “Díaz de Serrano Gracia s/Denuncia” y “Díaz de Serrano c/ Politti y otros/Redargución de Falsedad” (cf. factura n° 0001-000032 de fecha 15/11/2006, fs. 36); **b)** la suma de **\$7.200** por gastos y honorarios de la Dra. Vantenson Liliana en la causa Romero Carlos s/ Reivindicación (cf. recibo de fecha 30/10/2007, fs. 37); **c)** la suma de **\$12.000** en concepto de gastos de movilidad y honorarios en la causa “Ricardo Serrano s/Delito de Usurpación. Expte. 171/03” (cf. recibo de fecha 05/10/2005, fs. 38); **d)** la suma de **\$10.000** por gastos y pagos por la toma de posesión y trabajos de seguridad del Sr. Roque Cajal (cf. recibos de fecha 01/07/2007 y 18/05/2007 de \$5.000 cada uno a fs. 45); **e)** la suma total de **\$18.500** en concepto de pago por “custodia adicional”, desde la fecha en que se obtuvo el desalojo hasta la actualidad (cf. recibos de fecha 22/06/2007 por \$3900 y \$4.000, 21/06/2007 por \$4.000, 19/07/2007 por \$3500, 16/08/2007 por \$1550, 22/09/2007 por \$1550, fs. 42/44); **f)** la suma de \$1912 por pago mensual de serenos y guardias a fin de evitar nuevas usurpaciones (cf. recibos de fs. 39/41, \$400 18/06/2007, \$400 18/07/2007, \$400 22/08/2007, \$400 22/08/2007, \$100 09/08/2007, \$112 09/08/2007, \$150 05/09/2007).

Al respecto señalo que, el daño material consiste en el menoscabo del patrimonio en sí mismo y puede dividirse en daño emergente y lucro cesante. El primero -que se analiza en el presente punto- equivale a la pérdida o disminución de valores económicos ya existentes; esto es, un empobrecimiento del patrimonio. Ahora bien, en virtud del art. 302 del CPCCT (Ley 6176, vigente al momento de la demanda), pesa sobre el actor probar el presupuesto de hecho de la norma invocada como fundamento de su pretensión. A tal efecto, el actor acompaña en autos en fecha 27/03/2008 la documentación respaldatoria de los gastos de honorarios y custodia contratados, esto es, facturas y recibos por pago de honorarios, recibos por pago de vigilancia, poder conferido por el actor al Sr. Cajal,

convenio de policía adicional (cuyas copias glosan a fs. 22/140 y los originales fueron reservados a fs. 145).

A su vez, compulsadas las causas "Díaz de Serrano Gracia s/Denuncia" hoy "Politti Mattar Victor Raul, Romero María Isabel y/o Serrano Susana y Otros s/Defraudación. Expte. 23805/2003" (reservada en fecha 09/12/20) y "Romero Carlos s/ Reivindicación" hoy "Jerez Miguel Alejandro c/ Serrano Ricardo. Expte. 336.245" (reservado a fs. 526), tengo que consta la intervención de los letrados citados por el actor, como así también la participación del Sr. Roque Cajal en el cumplimiento de la medida cautelar que ordenó la restitución del inmueble en el juicio de reivindicación.

Por su parte, tengo presente que el demandado Ricardo Serrano no contestó demanda por lo que los hechos y documentos deben tenerse por auténticos (art. 293 inc. 2 CPCCT - Ley 6176 y art. 263 del actual CCCN).

En mérito a ello, corresponde admitir la suma de **\$53.612** en concepto de daño emergente reclamada por el actor. A dicho monto, corresponde aplicar intereses desde la fecha en que cada pago fue erogado (cf. lo detallado en el primer párrafo de este punto) a la fecha de este pronunciamiento, los que deberán ser calculados a la tasa anual del 8%. Asimismo, desde la fecha de este pronunciamiento hasta la de su efectivo pago, devengarán intereses a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (cf. Plenario CNCiv. de apelaciones in re "Samudio de Martínez, Ladislao").

**7.2 Lucro cesante.** El actor reclama la suma total de \$160.000 con más intereses, por lo que dejó de percibir con motivo de la privación ilegítima del uso del inmueble durante 45 meses (término que duró la usurpación). Considera que, siendo que el campo está destinado específicamente para el cultivo de soja, poroto, maíz, etc. y en razón de la extensión del mismo, estima un valor locativo anual de \$40.000.

El lucro cesante se configura con la frustración de un enriquecimiento patrimonial razonablemente esperado, de los que se privó al damnificado -en el caso, el actor en autos, titular del inmueble-. Como ya se dijo al momento de analizar la prescripción, el valor locativo anual reclamado se traduce a los frutos que dejó de percibir el actor en virtud de la retención indebida del inmueble, por lo que corresponde su restitución (art. 2438 y 1069 del CC).

Ahora bien, pese a no contar con copia del contrato, se encuentra acreditado en autos que el inmueble ubicado en Isca Yacu se encontraba sujeto a

arrendamiento con el Sr. Seiler, conforme los dichos del testigo Ramón Hugo Segovia (fs. 628). Asimismo, conforme ya fuera expuesto, el Sr. Seiler al informar en el juicio sucesorio el ingreso del Sr. Ricardo Serrano detentando el carácter de administrador de la sucesión, refiere que es arrendatario de dos inmuebles, uno sito en Isca Yacu y otro en Las Cejas.

A más de ello, en el contrato de cesión formalizado entre el Sr. Jose Serrano y el actor en autos (copia a fs. 23) se reconoce el contrato de locación a favor del Sr. Seiler, cuyos derechos se transfieren al cesionario (actor en autos).

Por su parte, cabe señalar que el actor afirma que en el juicio de reivindicación se apersonó de manera voluntaria la Sra. Miriam Mercedes Jerez, en el carácter de arrendataria por un contrato celebrado entre el demandado y ésta (cuya copia fue acompañada a fs. 103) durante la ocupación indebida del inmueble. Compulsada dicha causa, surge acreditado el pedido de intervención de la Sra. Jerez en tal carácter.

Con todo ello, queda probado que la pretensión de restitución del valor locativo reclamado en el presente rubro surge razonable conforme al curso normal y ordinario de las cosas y a la sana crítica, en tanto el inmueble resultaba apto para el cultivo de soja, trigo, maíz, etc. y por ello fue sujeto a arriendo.

Sentada la interrupción de la fuente de ingresos, el nexo causal y la certeza razonable de su existencia, corresponde determinar la procedencia del monto estimado. En efecto, el actor reclama la suma de \$40.000 anuales durante el período de 45 meses, tal período se encuentra probado en tanto el ingreso al inmueble data desde el 07/10/2003 y su desocupación ocurrió en junio de 2007, conforme lo analizado hasta aquí. Sin perjuicio de ello, no se acompañó tasación ni parámetros para determinar la procedencia del monto estimado.

En virtud de ello, considero pertinente tomar como parámetro el valor locativo anual del inmueble ubicado en Las Cejas, cuyo contrato fue acompañado en el sucesorio (véase fs. 151 del primer cuerpo de la causa digitalizada y acompañada en autos en fecha 30/05/2023) y corresponde a un inmueble de 350 has, pactado en la suma U\$S 40.000 anuales a la fecha de su celebración, es decir al 15/08/2001. Dicho monto equivale a dicha fecha la suma de \$40.000 pesos.

Considerando que el inmueble de autos cuya extensión es de 117 has (un tercio del inmueble de referencia) y que el valor locativo se estimará a la fecha en que se produjo el ingreso por el demandado Serrano, es decir al 07/10/2003 dos años después a la estimación usada como parámetro, considero razonable fijar el valor locativo mensual en \$20.000 anuales. Dicho monto, multiplicado por la

cantidad de años que duró la usurpación (45 meses, es decir casi 4 años), arroja la suma de \$80.000.

En consecuencia, corresponde admitir el rubro reclamado por el actor en la suma de **\$80.000** en concepto de lucro cesante. A dicho monto, corresponde aplicar intereses a una tasa anual equivalente al 8%, desde la fecha en que el inmueble fue ocupado por el Sr. Ricardo Serrano (07/10/2003) hasta la fecha de este pronunciamiento. Asimismo, desde la fecha de este pronunciamiento hasta la de su efectivo pago, dicho monto devengará intereses a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (cf. Plenario CNCiv. de apelaciones in re "Samudio de Martínez, Ladislao").

**7.3 Daño moral.** El actor reclama la suma de \$200.000 o lo que en más o en menos sepa discernir el criterio del Magistrado. Cita el artículo 1068 del CC, doctrina y jurisprudencia. Expresa que es una persona que siempre ha actuado de acuerdo a las reglas del buen proceder. Sostiene que fue sometido a tensión como consecuencia de la usurpación de la vivienda, alevoso robo y violación de su propiedad, miedo constante de nuevas amenazas físicas y persecuciones llevadas a cabo por la familia Serrano y el endeudamiento y gastos de abogados y escribanos.

El daño moral, regulado en el art. 1078 del CC, comprende el resarcimiento por el perjuicio que afecta los aspectos no patrimoniales de la persona, como su paz mental, su dolor o sufrimiento emocional y pretende reparar el sufrimiento y las angustias padecidas, reconociendo así el impacto emocional de ciertos daños. El actual art. 1738 del CCCN, indica que éste comprende todas las repercusiones no patrimoniales, los derechos personalísimos de la víctima, su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y la interferencia de su proyecto de vida. Asimismo, en cuanto a la indemnización de las consecuencias no patrimoniales, el actual art. 1741 del CCN señala que el monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas.

En mérito a ello y a las constancias de la causa, tengo que el daño moral pretendido resulta notorio de los propios hechos narrados y se manifiesta *in re ipsa*, esto es a partir de las circunstancias ya señaladas. En virtud de lo expresado, tengo por justificado el daño extrapatrimonial ocasionado al peticionante a raíz de la existencia de la acción de reivindicación que el actor tuvo que iniciar para lograr la restitución del inmueble, las denuncias efectuadas en sede penal, las perturbaciones que refieren los testigos y que habría sufrido el actor (como ser asistencia psicológica y cambios de residencia), los temores y miedos que señala el actor y que pueden inferirse de la custodia y la guardia policial contratada para evitar la ocupación del inmueble, entre otros. Lo expresado razonablemente debió causar

malestar y aflicción en los más íntimos sentimientos y tranquilidad espiritual del actor y dan cuenta de la conducta del demandado, quien en modo alguno aportó pruebas conducentes para rebatirla.

Por consiguiente, entiendo justificable determinar el monto de **\$500.000**, en favor del actor en concepto de daño moral. A dicho monto, corresponde adicionar intereses a una tasa anual equivalente al 8%, desde la fecha en que el inmueble fue ocupado por el Sr. Ricardo Serrano (07/10/2003) hasta la fecha de este pronunciamiento. Asimismo, desde la fecha de este pronunciamiento hasta la de su efectivo pago, dicho monto devengará intereses a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (cf. Plenario CNCiv. de apelaciones in re "Samudio de Martínez, Ladislaa").

**8. Corolario.** Por lo hasta aquí considerado, corresponde no hacer lugar a la excepción de prescripción liberatoria parcial interpuesta por el demandado Ricardo Serrano. Asimismo, corresponde hacer lugar a la acción de daños y perjuicios interpuesta por el actor Carlos Alberto Romero DNI N° 25.373.111 únicamente en contra del demandado Ricardo Serrano DNI° n° 12.921.912 y **ABSOLVER** a los restantes demandados José Serrano (h) DNI n° 11.030.047, Ángela Isabel Serrano DNI N° 17.927.219 y Estela Serrano DNI N° 23.827.862.

En consecuencia, **CONDENO** únicamente al demandado Ricardo Serrano a abonar al actor la suma de **\$633.612 (pesos seiscientos treinta y tres mil seiscientos doce)** en concepto de daño emergente, lucro cesante y daño moral, con más los intereses en la forma considerada.

**9. Costas.** En virtud del principio objetivo de la derrota, siendo que la demanda prospera únicamente en contra del demandado Ricardo Serrano, quien invocando el carácter de administrador del sucesorio de su padre produjo el hecho dañoso, provocó la citación de los restantes herederos y resultó vencido, corresponde imponer las costas del proceso a su cargo (art. 61 CPCC - Ley 9531)

**10. Honorarios.** Se difiere su regulación para la etapa procesal oportuna, hasta tanto exista base firme al efecto (cf. art. 20 ley 5480).

Por ello,

#### **RESUELVO:**

**1. NO HACER LUGAR** a la excepción de prescripción liberatoria parcial interpuesta por el demandado Ricardo Serrano, conforme lo meritado.

**2. HACER LUGAR** a la acción de daños y perjuicios interpuesta por el actor Carlos Alberto Romero DNI N° 25.373.111 únicamente en contra del

demandado Ricardo Serrano DNI° n° 12.921.912 y **ABSOLVER** a los restantes demandados José Serrano (h) DNI n° 11.030.047, Ángela Isabel Serrano DNI N° 17.927.219 y Estela Serrano DNI N° 23.827.862. En consecuencia, **CONDENO** únicamente al demandado Ricardo Serrano a abonar al actor la suma de **\$633.612 (pesos seiscientos treinta y tres mil seiscientos doce)** en concepto de daño emergente, lucro cesante y daño moral, con más los intereses en la forma considerada.

**3. COSTAS**, conforme se consideran.

**4. HONORARIOS**, oportunamente.

**HÁGASE SABER**

**PEDRO ESTEBAN YANE MANA**  
**JUEZ CIVIL Y COMERCIAL COMUN 1° NOMINACIÓN**  
**OFICINA DE GESTIÓN ASOCIADA CIVIL Y COMERCIAL Nro. 2**

LCV.

NRO.SENT: 2270 - FECHA SENT: 17/10/2024

**FIRMADO DIGITALMENTE**

**Certificado Digital:**

CN=YANE MANA Pedro Esteban, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 20178601580, Fecha:17/10/2024;

La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial del Poder Judicial de Tucumán <https://www.justucuman.gov.ar>